



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Acción de inconstitucionalidad

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ASUNTO: se promueve acción de inconstitucionalidad.

Normas generales impugnadas: artículos 13, apartado A, 195, 196 y 224, fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

OFICIO PGR/ 291 /2017.

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
P r e s e n t e.

Alberto Elías Beltrán, en mi carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y ante la falta de titular de la Institución, con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR); 3, inciso A), fracción I, y 137, párrafo primero, de su Reglamento¹; y en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitución); así como 6°, fracción II, de la citada LOPGR, comparezco y expongo:

1. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el de Calle Río Guadiana, número 31, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.
2. Designo como delegados, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria, a los licenciados Armando Argüelles Paz y Puente, Dulce

¹ De acuerdo con las consideraciones vertidas por ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 15/2015, debido a que a la fecha de la presentación de esta demanda no existe Procurador General de la República designado, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, quien por virtud de ley funge como encargado de despacho, tiene legitimación para incoar el presente medio de control constitucional.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

María Vite Mena, Leticia Villeda Suárez, Francisco Guillermo Gómez González, Lucía Rafaela Muerza Sierra, Jaime Enrique Franco Martínez, Rogelio Moreno Sánchez, Carmen Tapia Paz, Edgar Pérez Canela, Sandra Noelia Ruiz Loyola, Alma Delia Villegas Muñoz, Yemí Flores Navarro, Verónica Segura Guerrero, Víctor Manuel Avantes Ruiz, Ana Cristina Romero González, Luis Alberto Jiménez Mendoza, Héctor Alfonso Cadenas Esponda, Francisco Cabrera Monsalvo, Inocencio Vicuña Balderrama, Nancy Sandra Canseco Sáenz, Pedro Arroyo Bernal y María Getzabel Jasso Hidalgo, todos ellos servidores públicos de la Procuraduría General de la República.

3. Promuevo demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la norma que más adelante se precisa, en los siguientes términos.

I. AUTORIDADES EMISORA Y PROMULGADORA DE LAS NORMAS EMPUGNADAS

1.1. **Autoridad emisora:** Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Boulevard Francisco Coss s/n, esquina Obregón, Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

1.2. **Autoridad promulgadora:** Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en el Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Calle Juárez y Zaragoza s/n, Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

II. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMAN

Artículo 13, apartado A, 195, 196 y 224, fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el Decreto 990, publicado en el periódico oficial de la entidad el viernes 27 de octubre de 2017.

III. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS

Artículos 1º, 4, 19 y 73, fracción XXI, inciso c), de la CPEUM.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

IV. CONCEPTOS DE INVALIDEZ

4.1. PRIMERO. El artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al establecer un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, violó los artículos 1º y 19 de la CPEUM, pues regula una restricción a la libertad personal que es de orden constitucional.

4.1.1. Parámetro de regularidad constitucional

4.1.1.1. Marco constitucional

Las reformas a la CPEUM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 y el 10 de junio de 2011, significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México. Este cambio trascendental – materializado especialmente en su artículo 12^o – exige a todas las autoridades del país un minucioso análisis del nuevo texto constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo en materia de derechos humanos.

FEDERAL
DE
DE ACUERDO
INTRODUCCIÓN
CCIONES
IDAD

² “Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Asimismo, de un análisis del proceso de reforma a la CPEUM, se observa que, de la voluntad del Poder Reformador de la Constitución³, se desprenden las siguientes conclusiones: (i) se buscaba que los derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados internacionales, conformaran un solo catálogo de *rango constitucional*; (ii) se pretendió que el conjunto de los derechos humanos vincule a los órganos jurisdiccionales a interpretar no solamente las propias normas sobre la materia, sino toda norma o acto de autoridad dentro del ordenamiento jurídico mexicano, erigiéndose como *parámetro de control de regularidad constitucional*, y (iii) se sostuvo que no solamente las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos constituyen ese parámetro de regularidad constitucional, sino *toda norma de derechos humanos*, independientemente de que su fuente sea la CPEUM, un tratado internacional de derechos humanos o un tratado internacional que, aunque no se repite de esa materia específicamente, proteja algún derecho de esta clase.

Así pues, tenemos que el artículo 1º de la Norma Suprema, en sus dos primeros párrafos, establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la CPEUM establece, amén de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán "conforme" a esa norma fundamental y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona en su protección más amplia.

Por otra parte, tenemos al artículo 19, segundo párrafo⁴, de la Constitución, el cual establece los casos en que ha lugar a la prisión preventiva

³ Lo anterior se advierte en los dictámenes de las de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

⁴ "Artículo 19.

...
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

de manera oficiosa, como supuesto excepcional para restringir la libertad personal.

Asimismo, una de las modificaciones que trajo consigo la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 al artículo 19 fue la reducción en el empleo de la prisión preventiva como medida cautelar para armonizarla con el principio de presunción de inocencia⁵. Derivado de lo anterior, su imposición pasó de ser la regla general⁶ a la excepción⁷, con la finalidad de ajustarla a los estándares internacionales. Tal cuestión se encuentra materializada en la nueva confección dada a la primera parte del párrafo segundo del artículo en mención.

4.1.1.2. Marco jurisprudencial

Al resolver el expediente Varios 912/2010, el Pleno de ese Alto Tribunal destacó que, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ha transformado el paradigma de la revisión de la constitucionalidad de los actos de autoridad a través de los juicios de amparo. Dicha reforma, de hecho, ha cambiado la visión de protección de derechos, al

desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

⁵ Esta afirmación se sustenta en que la imposición de una medida cautelar personal rompe *per se* con la lógica general de la presunción de inocencia, por lo que su procedencia y límites se encuentran acotados por criterios de excepcionalidad y proporcionalidad. Véase: González, D., *Manual Práctico del Juicio Oral*, Ubijus e Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2ª ed., México, 2010, p. 93.

⁶ Otrora expresada en el dictado necesario del auto de formal prisión siempre que se vincule a proceso a un individuo por la comisión de un delito que contemple pena privativa de libertad.

⁷ Véase: Cámara de Diputados. Antecedentes del proceso de reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008. Dictamen de la Cámara de origen. Prisión preventiva y delitos graves. 11 de diciembre de 2007. *Medidas cautelares y prisión preventiva*.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

sustituirse el término de “garantías otorgadas” por el de “derechos humanos reconocidos” en la CPEUM. Además, entre otros temas, ha incorporado como directriz constitucional el principio *pro homine*, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Razón por la cual, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos⁸.

Asimismo, en el citado asunto, se hizo una interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los resultados fue que todas las normas gozan de una presunción de constitucionalidad que puede ser derrotada, para lo cual se lleva a cabo el control *ex officio* en tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación.

Además, los criterios de ese Tribunal Pleno surgidos del análisis del expediente Varios 912/2010 están dirigidos a interpretar las obligaciones contenidas en el artículo 1º constitucional vigente a partir del 10 de junio de 2011, consistentes en que todas las autoridades del país deben “velar” por los derechos humanos contenidos en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, de conformidad con el principio *pro persona*.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el Pleno de esa SCJN, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, el 3 de septiembre de 2013,⁹

⁸ Véase el expediente Varios 912/2010, resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del 14 de julio de 2011.

⁹ Registro No. 2006224. DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

determinó que el primer párrafo del artículo 1º de la CPEUM reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la CPEUM y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Sin embargo, cuando en la CPEUM haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con ella, tanto en un sentido formal como material.

4.1.1.3. Marco internacional

En relación al tema de restricciones constitucionales, la CoIDH estableció que:

Sobre el artículo 11 de la Constitución Federal, el derecho de circulación y de residencia, incluido el derecho a salir del país, puede ser objeto de restricciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se encuentren expresamente fijadas por la ley, y que estén destinadas a prevenir infracciones penales o a proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás, en la medida indispensable en una sociedad democrática¹⁰.

- Por su parte, en relación con el tema de la prisión preventiva como medida cautelar, ha establecido que debe tener un carácter estrictamente cautelar y no punitiva o de condena. Esto es, para no tergiversar su naturaleza cautelar, debe atender estrictamente a estándares relacionados con "asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las

EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo I; Pág. 202. P./J. 20/2014 (10a.).

¹⁰ Véase: CoIDH, *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C, núm. 111.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

investigaciones y que no eludirá a la acción de la justicia”¹¹, ya que solamente estos dos criterios constituyen fines legítimos y respetuosos del principio de proporcionalidad en tanto restricción a un derecho fundamental¹².

4.1.1.4. Marco doctrinal

Sobre el tema, Silva García¹³ ha señalado que las restricciones constitucionales expresas a los derechos humanos son excepciones a la regla general del principio *pro homine*. Asimismo, sostiene que la Constitución Federal contempla diversas restricciones constitucionales expresas a los derechos humanos y que los derechos humanos y el principio *pro homine* están reconocidos en la norma suprema, lo que exige un particular balance interpretativo para su mutua coexistencia, y conlleva a un equilibrio adecuado entre democracia formal y democracia sustantiva.

De igual modo, este tratadista ha establecido que: “las restricciones constitucionales expresas no desaparecen a partir de la introducción del principio *pro homine* en la norma suprema, además de que las restricciones constitucionales expresas no son absolutas, es decir, no constituyen figuras metaconstitucionales. Todas las restricciones constitucionales expresas, inclusive en nuestra particular democracia, están rodeadas de garantías y derechos que deben observarse para que la aplicación de aquéllas resulte válida”¹⁴.

¹¹ Véase: CoIDH Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77.

¹² Véase: CoIDH. Caso Chaparro Álvarez y López Iñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 93.

¹³ Silva García, Fernando, *Derechos Humanos y restricciones constitucionales*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, visible en la página: <http://biblio.juridicas.unam.mx>, pp. 260 a 264. Consultada el 15 de noviembre de 2017 a las 13:08 horas.

¹⁴ *Ibid.* p 262.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.1.2. Norma objeto de control constitucional

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	
Decreto número 990	
Artículo 13 (Prisión preventiva oficiosa, y factores de riesgo que indican imponer prisión preventiva)	
A. (Prisión preventiva oficiosa)	
La prisión preventiva se ordenará oficiosamente en los supuestos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo previsto en este código, cuando se trate de los delitos siguientes:	
I. Homicidio doloso, simple o calificado, inclusive el cometido en riña con carácter de provocador, o bajo emoción violenta. Así como los eventos de feminicidio, parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio y otros homicidios por razón del parentesco o relación. Igualmente, cuando se trate de homicidio cometido con acuerdo e indeterminación del autor, de homicidio en codominio, o de homicidio por coresponsabilidad en delito emergente, sean o no calificados.	
II. Violación, violación equiparada y violación impropia por instrumento o elemento sustituto al natural, cometidas con o sin modalidades agravantes, previstas en las fracciones I y III del artículo 224 y los artículos 225 y 228 de este código; con inclusión de cualquiera de dichas conductas cometidas contra personas menores de quince años previstas en las fracciones I y II del artículo 229 y los artículos 230 y 231 de este código.	
III. Abuso sexual, cometidos con o sin modalidades agravantes, previstos en los artículos 225, 227 y 228 de este código; así como el abuso sexual contra personas menores de quince años previsto en la fracción III del artículo 229 y los artículos 230 y 231 del mismo código.	
IV. Delitos de corrupción de menores o de incapaces previstos en el artículo 237 de este código.	
V. Cuando se trate de cualquier delito que sea competencia de los jueces del Estado, que sea realizado con la intervención típica de un menor de dieciocho años de edad.	
VI. Los delitos de desaparición de persona.	
VII. Los delitos cometidos con armas.	
Se consideran delitos cometidos con armas los que, para lesionar o intimidar, el sujeto activo emplea alguna de las armas comprendidas en el artículo 336 de este código o en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De igual manera, cuando utilice cualquier instrumento que sin ser arma de fuego, dispara proyectiles con la capacidad de lesionar al sujeto pasivo.	

Como se desprende del numeral transcrito, el Legislador local estableció un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.



4.1.3. Ejercicio de contraste

Ahora bien, como ya se estableció en el marco constitucional del presente concepto de invalidez, tenemos que el artículo 1° de la Constitución establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece. Por su parte, el artículo 19, segundo párrafo, de la Norma Suprema establece los casos en que ha lugar a la prisión preventiva de manera oficiosa, como supuesto excepcional para restringir la libertad personal, lo que ha sido avalado por la CoIDH.

Misma restricción que, como se señaló en el marco jurisprudencial, ha sido avalada por la Suprema Corte al establecer que, cuando en la CPEUM haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Ahora bien, la libertad personal es un derecho humano previsto en la Constitución, y solamente puede ser restringida bajo los supuestos establecidos en los postulados constitucionales, a fin de otorgar seguridad jurídica para los gobernados y a los operadores jurídicos al momento de aplicarlos.

Lo anterior lleva a concluir que la prisión preventiva oficiosa deba ser leída como una restricción de gran intensidad al derecho humano de la libertad, reconocido expresamente en el texto constitucional¹⁵.

¹⁵ Lo anterior no se traduce en negar que la gravedad de un delito es un tema que se tiene en consideración al momento de imponer la medida cautelar. Sin embargo, este análisis no se realiza bajo un enfoque material (punitivo), sino a la luz de la circunstancia que podría implicar la amenaza de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, impida el desarrollo eficiente de las investigaciones o signifique riesgo para la víctima, esto es, siempre bajo un enfoque cautelar. Tal cuestión debe ser sopesada en una base de caso por caso.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Así, la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción específica más limitativa del derecho fundamental a la libertad que la que prevé el resto del parámetro de regularidad constitucional de fuente internacional creado por el artículo 1º y que, sin embargo, por configurarse de manera directa e inmediata en el texto constitucional, resulta, según el criterio establecido por el Tribunal Pleno¹⁶, válida y compatible con el orden doméstico mexicano.

De esta manera, tenemos que el artículo 19 de la Constitución establece que el juez debe ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa como consecuencia necesaria de la vinculación a proceso en los casos enumerados en la porción normativa invocada. Se trata pues, de un régimen distinto al de la prisión preventiva *in genere*, ya que el de mención está basado en un estándar netamente material, es decir, que atiende *a priori* a la naturaleza del delito imputado como único criterio de activación de esta institución cautelar.

Conforme a la estructura del propio artículo 19 constitucional, pueden distinguirse tres tipos o categorías de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa: delitos específicos previstos en leyes ordinarias [delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y delitos cometidos con medios violentos]; delitos específicos previstos en leyes generales [secuestro y trata de personas, a que se refiere el artículo 73, fracción XXI, inciso a)], y delitos graves que determinen las leyes (contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud).

Con este ejercicio se puede identificar con más facilidad en qué medida puede intervenir el legislador ordinario. Respecto a los dos primeros catálogos, los congresos locales pueden tipificar los delitos que se encuentran dentro de su ámbito competencial, como homicidio doloso, violación y determinados delitos cometidos con medios violentos; lo que no pueden hacer

¹⁶ DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Tesis. P./J.20/2014 (10ª).



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

con delincuencia organizada ni delitos previstos en leyes generales. Sobre el tercer catálogo, debido a que no están en sus ámbitos competenciales las materias de seguridad de la Nación ni delitos contra la salud, solamente podrán determinar la gravedad de los delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad en las leyes correspondientes.

Como se puede observar, de ninguna porción del artículo 19 se desprende que las leyes locales puedan tener la vocación de determinar en qué supuestos procederá la prisión preventiva oficiosa.

Por ende, en las circunstancias que imperan actualmente en el sistema jurídico mexicano, es necesario fijar nítidamente que todo asunto que verse sobre una restricción constitucional exige que su escrutinio deba ser desplegado de la manera menos expansiva posible, en tanto constituye una excepción a la aplicabilidad del principio *pro persona* consagrado en el artículo 1º constitucional, esto es, acotando al máximo su carácter restrictivo para engarzarlo, a su vez, con los lineamientos establecidos por el propio Poder Revisor de la Constitución para normar la operatividad de la propia limitante.

Con base en lo expuesto, se concluye que el párrafo segundo del artículo 19 constitucional impone un estándar material taxativo que, bajo la excepcionalidad y estricto tratamiento con el que hay que aproximarse a esta restricción constitucional, no puede ser ampliado, precisado, profundizado ni variado por la legislación ordinaria, debido a que su aplicación corresponde al juez local directamente desde la Constitución. Es decir, el legislador ordinario no puede ni siquiera aspirar a regular los supuestos por los que debe proceder la prisión preventiva oficiosa, salvo que así lo autorice la Ley Fundamental, lo que en el caso no acontece, como ya se estableció.

Lo anterior, aunado a que, como se advierte del propio catálogo del artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, se agrega, por una parte, un delito que no se encuentra en los supuestos del artículo 19 de la CPEUM, como es en este caso el delito de desaparición de personas, así como, por otra, un nuevo supuesto: cuando los delitos competencia de los jueces del Estado son cometidos con la intervención de un



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

menor de dieciocho años, lo que genera que el legislador local amplíe los supuestos de restricción específica al derecho fundamental a la libertad, conculcándose así, una violación al texto constitucional.

Por estas razones, se estima que el artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al regular los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, entendida como una figura que restringe derechos fundamentales y que por esta razón solamente puede ser establecida a nivel constitucional, viola el artículo 1º de la CPEUM, en relación con el artículo 19 de la misma Norma Suprema.

4.2. SEGUNDO. El legislador de Coahuila, al prever en el artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la CPEUM, al regular la materia procedimental penal.

LA FEDERACIÓN
DE LA UNIÓN
DE ACUERDOS
CONTRAVENIR
E ACORDAR
ALIDAD.

4.2.1. Parámetro de regularidad constitucional

4.2.1.1. Marco constitucional

El artículo 73, fracción XXI, inciso c),¹⁷ de la CPEUM establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir, entre otras, la legislación única en materia procedimental penal.

¹⁷ "Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. [...]

XXI. Para expedir:

a) y b)

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

[...]"



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Dicha disposición es resultado de la reforma constitucional publicada en el DOF mediante decreto de 8 de octubre de 2013, en la que el Poder Reformador de la CPEUM analizó la necesidad de unificar la legislación procesal penal para uniformar los criterios de política criminal que deben observarse en el proceso penal para evitar que en el país existan distintas formas de procurar y administrar justicia en la citada materia, la homologación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como lo relativo a la ejecución de penas.

Al respecto, son de destacar las consideraciones contenidas en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por diversos senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, emitidas con motivo de la reforma precisada en el párrafo que antecede, las cuales se reseñan a continuación:

"A. Legislación Procedimental Penal aplicable en toda la República en el orden federal y en el fuero común.

Justificación en atención al marco constitucional.

Para los miembros del Pacto por México, resulta necesario contar con un

Código Único de Procedimientos Penales de aplicación para el fuero

federal y el fuero común. Como se ha mencionado anteriormente, ésta

ha sido una solicitud reiterada de diversos actores sociales por considerarse

una medida necesaria para la adecuada procuración y administración de

justicia penal, la cual cobra una mayor relevancia a raíz de la reforma de

seguridad y justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el

dieciocho de junio de dos mil ocho. Esta reforma comprende entre sus ejes

uno de importancia total: la implementación de un sistema de justicia

penal de corte acusatorio y oral, para el cual se estableció una *vacatio legis*

de ocho años, que se cumplen el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

[...]

Cabe resaltar que a pesar de los grandes y destacados avances de las

entidades federativas en la implementación del sistema de justicia penal,

existen particularidades entre ellas que las distinguen de manera

significativa; con ello se han conformado sistemas de justicia penal

diferentes, cada uno con su propia lógica, visión y peculiaridades, que en

muchas ocasiones son aprovechadas por los indiciados para eludir su

responsabilidad en la comisión de hechos delictivos.

Son precisamente estas diferencias y sus implicaciones las que, desde

hace tiempo, han generado la idea de la unificación de la legislación en

materia penal. Cabe hacer mención del hecho de que nuestro país ya no



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

dado pasos importantes hacia la unificación, como sucedió con las reformas constitucionales que dieron origen a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en las cuales se establecieron tipos y sanciones penales homogéneos para todo el país, tanto a nivel federal como local, bajo la idea de contar con un solo marco legal para combatir a la delincuencia en estas materias.

[...]

Se tiene la firme convicción de que la unicidad en materia procedimental penal derivada de la expedición de un ordenamiento único permitirá la aplicación de un sistema en los fueros federal y local y dará cabal cumplimiento a lo previsto por el Constituyente Permanente, así como a lo acordado en el Pacto por México, en aras de la justicia y la paz de los mexicanos.¹⁸

Énfasis añadido

Derivado del estudio de los argumentos planteados en la citada iniciativa, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, concluyeron que era necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia contaran con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de penas¹⁹.

¹⁸ cfr. Exposición de motivos de la iniciativa presentada por los entonces senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero Morales, para reformar el artículo 73, fracción XXI, de la CPEUM.

¹⁹ Plasmado en el apartado denominado "III. CONSIDERACIONES" del Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión emitido en razón de la reforma a la CPEUM de 8 de octubre de 2013.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Dichas Comisiones consideraron que con la referida medida legislativa se obtendrían, entre otros, los siguientes beneficios: (i) una adecuada sistematización y homogeneidad de criterios legislativos; (ii) condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral; (iii) una mayor y mejor coordinación entre las instancias encargadas de la procuración de justicia; (iv) mayor certeza para el gobernado respecto a cuáles son las normas de naturaleza adjetiva a observar en todo el país; (v) una disminución en los índices de corrupción e impunidad, al existir menores resquicios legales con relación a la actual dispersión de normas, y (vi) criterios judiciales más homogéneos²⁰.

En síntesis, el Poder Revisor estimó necesaria la existencia de una legislación única, a nivel nacional, en materia de procedimientos penales y determinó que el Congreso de la Unión contaría con la facultad exclusiva para emitir esa legislación, a fin de que su implementación en todo el territorio nacional fuera unificada, clara y precisa.

Ahora bien, de la lectura del artículo transitorio primero del decreto de reforma a la CPEUM que nos ocupa, se desprende que la enmienda constitucional entró en vigor el 9 de octubre de 2013.

Asimismo, de conformidad con el transitorio segundo de la citada reforma constitucional, la legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión, conforme al mencionado decreto de reforma, entraría en vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio de 2016. De igual forma, establece que la legislación vigente en aquellas materias expedidas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México seguiría en vigor hasta que iniciara la vigencia de la legislación procedimental penal única.

En esta tesitura, resulta claro que, a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la CPEUM, el 9 de octubre de 2013,

²⁰ Ídem.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

tanto la Federación, en cuanto a su papel como legislador federal, así como las legislaturas de los estados, e inclusive la Asamblea de la Ciudad de México, se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia procedimental penal, quedando dicha facultad reservada al Congreso de la Unión.

Asimismo, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el DOF el decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), documento normativo que prevé los postulados que deben observarse en el procedimiento penal acusatorio y oral, de observancia general para las autoridades federales y locales, confirmándose así la prohibición de las entidades federativas para legislar en la materia.

4.2.1.2. Marco jurisprudencial

Respecto del tema de la competencia del Congreso de la Unión para regular la materia procedimental penal, el 7 de julio de 2015, en la acción de Inconstitucionalidad 12/2014²¹, promovida por esta Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Pleno de esa SCJN resolvió que los congresos locales ya no pueden normar en materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, como lo venían haciendo en términos del artículo 124 constitucional; ya solamente podrán ejercer las facultades que, en términos del régimen de concurrencia, se les reconozcan²².

²¹ cfr. Acción de inconstitucionalidad 12/2014, resuelta por el Pleno de la SCJN, el 7 de julio de 2015, pp. 39, 40 y 41. Visible en:

<http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=165034>, consultada el 15 de noviembre de 2017 a las 13:09 horas.

²² cfr. Engrose publicado en el Semanario Judicial de la Federación en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=165034>, consultado el 15 de noviembre de 2017 a las 13:08 horas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Ese Alto Tribunal, ajustándose al mandato constitucional de 8 de octubre de 2013, determinó que, a partir de la reforma en comento, el Congreso de la Unión es la autoridad que tiene la facultad para emitir la legislación única en materia procedimental penal, enmienda que tuvo como motivación generar una homogeneidad normativa en la materia de mérito; por tanto, de ningún modo puede ser reproducida en las leyes locales, **menos aún modificada**, pues no se cumpliría el objetivo del Poder Revisor de la CPEUM consistente en terminar con las profundas diferencias entre una entidad y otra en las formas de regulación de la materia en cita.

El 20 de agosto de 2015, en la acción de inconstitucionalidad 107/2014, promovida por la PGR en contra de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, el propio Pleno de ese Alto Tribunal reiteró que los estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, por lo que, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha²³.

De igual forma, ese Máximo Tribunal resolvió el 11 de abril de 2016 la acción de inconstitucionalidad 29/2015, promovida de igual forma por esta Institución en contra de los artículos 2, fracción VI, 24 y 25 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en los Procedimientos Penales en el Estado de Zacatecas, en la que determinó que las normas impugnadas en ese medio de control son inconstitucionales, por regular el procedimiento penal acusatorio, no obstante que el legislador local carece de facultades para ello²⁴.

²³ cfr. Engrose publicado en el Semanario Judicial de la Federación en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=174831>, consultado el 15 de noviembre de 2017 a las 13:09 horas.

²⁴ cfr. Engrose publicado en el Semanario Judicial de la Federación en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=181119>, consultado el 15 de noviembre de 2017 a las 13:10 horas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

El 18 de mayo de 2017, en la acción de inconstitucionalidad 35/2015 promovida por la PGR en contra de los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, el Pleno de la SCJN estableció que la determinación de las fases del procedimiento, las facultades de los jueces y las medidas y condiciones necesarias para interponer un recurso son indudablemente cuestiones de naturaleza procesal que inciden directamente en el procedimiento penal acusatorio, declarando inconstitucionales las normas impugnadas por exceder las facultades legislativas locales al regular en materia de procedimiento penal²⁵.

4.2.1.3. Marco doctrinal

4.2.1.3.1. Legislación única en materia procedimental penal

José de Jesús Izquierdo Ubaldo señaló, antes de que se publicara el Código Nacional, que con la emisión de la legislación única en materia de procedimiento penal se optimizaría la justicia penal en nuestro país, ya que parecía que existía una carrera frenética entre legislaturas para producir más normas de esta materia²⁶.

Por su parte, Gerardo García Silva señaló que los tres poderes tienen una enorme responsabilidad en la definición de la postura que adopta el Estado frente a la cuestión criminal y que “no pueden alegarse paradojas o antinomias para presentar un efectivo combate a la criminalidad”, por lo que debe

²⁵ Véase engrose publicado en el Semanario Judicial de la Federación en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=183798>, consultado el 15 de noviembre de 2017 a las 13:10 horas.

²⁶ Izquierdo Ubaldo, José de Jesús, *El Derecho Penal a Juicio. Diccionario Crítico*, coordinadores, Laveaga, Gerardo y Lujambio, Alberto, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2007, p. 117.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

estudiarse más a fondo la adopción en nuestro sistema de figuras como la "reserva de código"²⁷.

De igual forma, para Moisés Moreno Hernández, especialista en derecho procesal penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, era necesario consolidar un sistema de justicia penal que respondiera a las exigencias de un Estado democrático de Derecho, por lo que ha señalado la conveniencia de contar con un código adjetivo que cubra, tanto a las expectativas actuales de la sociedad, como a las exigencias de un sistema de justicia penal de corte democrático. Para ello, sugirió diseñar y desarrollar el sistema procesal penal acusatorio, con los criterios y mecanismos que le son propios. Pero, además, para que dicho sistema resultara consolidado y viable, propuso contemplar la posibilidad de que, incluso en la propia Constitución Política, se previeran con toda precisión los lineamientos que deben regir al sistema procesal en el Estado mexicano, así como las transformaciones que tanto orgánica como funcionalmente habrían de experimentar las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y sus auxiliares, el Poder Judicial y el órgano encargado de la ejecución penal²⁸.

COLEGIO
DE ABOGADOS
NACIONALES
DE MÉXICO

4.2.1.3.2. La prisión preventiva como medida cautelar

En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por "prisión o detención preventiva" todo el periodo de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, ordenado por una autoridad judicial y previo a una sentencia firme²⁹.

²⁷ García Silva, Gerardo, *El Derecho Penal y Juicio. Diccionario Crítico*, Procuraduría General de la República, Instituto de Ciencias Penales, México 2007, p. 386.

²⁸ Moreno Hernández, Moisés, *Retas del Sistema Procesal Penal en México, Algunas propuestas para la transformación del Sistema de Justicia Penal*, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2004, p. 27.

²⁹ CIDH. Audiencia temática: Uso de la prisión preventiva en las Américas, 146º período ordinario de sesiones, organizada por Fundación para el Debido Proceso (DPLF), De Justicia, Instituto de Defensa Legal (IDL) y otros, 1 de noviembre de 2012, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=129>.

Consultada el 15 de noviembre de 2017 a las 13:11 horas



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Su fin es la consecución de un buen juicio, esto, mediante la probada y justificada como necesaria reclusión del inculcado, de manera que no pueda afectar las investigaciones en torno al delito que se le imputa o no pueda evadir la aplicación de la justicia.

Asimismo, se ha definido que "la privación preventiva de la libertad de los inculcados no es una pena, puesto que ninguna pena puede existir donde no hay culpable declarado como tal en juicio"³⁰.

En ese mismo orden de ideas, Luis Rodríguez Manzanera nos refiere que la prisión preventiva es una medida de seguridad y se basa solamente en una presunta peligrosidad ante la sospecha de que el sujeto cometió un delito³¹.

La prisión preventiva es considerada como una medida cautelar. En el "Prontuario del Proceso Penal Mexicano"³², se menciona que el juez dispone de ciertas medidas llamadas cautelares o precautorias, para asegurar la buena marcha del proceso, ello, en virtud de que dicha medida incide directamente en el proceso.

Además, en ese mismo documento se señala que la prisión preventiva es una forma procesal, no penal, de privación de libertad, a fin de asegurar que el inculcado no se sustraiga de la acción de la justicia ni frustre los fines del proceso o cometa nuevos delitos.

³⁰ Ibañez Perfecto, Andrés, *Presunción de inocencia y prisión sin condena*. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Agosto 1997 año 9. No. 13.

³¹ Rodríguez, Manzanera Luis, *Crisis Penal y Sustitutivos Penales*, Editorial Porrúa, México, 1998, Pág. 24.

³² García Ramírez, Sergio, *Prontuario del Proceso Penal Mexicano*, Editorial Porrúa, México 1998, Pág. 19.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.2.2. Norma objeto de control de constitucionalidad

La norma materia del presente medio de control constitucional quedó definida en el apartado 4.1.2. del presente escrito, por lo que, ante la obviedad de repeticiones innecesarias, se omite transcribir su contenido.

4.2.3. Ejercicio de contraste

Ahora bien, y como ya se estableció en el marco constitucional, es a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la CPEUM, el 9 de octubre de 2013, que las legislaturas de los estados se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia procedimental penal, quedando dicha facultad reservada al Congreso de la Unión.

Misma restricción, como se señaló en el marco jurisprudencial, ha sido avalada por la Suprema Corte al establecer que los congresos locales ya no pueden normar en materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, y solamente podrán ejercer las facultades que, en términos del régimen de concurrencia, se les reconozcan.

Asimismo, la doctrina concuerda en que el juzgador dispone de ciertas medidas denominadas cautelares o precautorias para asegurar la buena marcha del proceso, las cuales inciden directamente en el proceso penal. Por lo tanto, la prisión preventiva solamente puede tener una función procesal y no una naturaleza sancionatoria (no son penas). Lo anterior, debido a que solamente se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan ceñirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva³³.

De esta manera, dado que la prisión preventiva es considerada como una medida cautelar cuya naturaleza es evidentemente procesal, y al ser modificada

³³ Gascón Inchausti, Fernando, *La Reforma de la Prisión Provisional en España*, en Cienfuegos Salgado, David, et al. (coord.), *Temas de derecho procesal penal de México y España*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 237-274.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

por el legislador local, al establecer los delitos que ameritan su procedencia, se genera una vulneración al principio de división de poderes, ya que los temas adjetivos penales son de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

En suma, se genera una vulneración a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia adjetiva, el artículo 13, apartado A, del Código en estudio contraviene lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

Por los razonamientos expuestos en los conceptos de invalidez Primero y Segundo de la presente demanda, esta Representación Social estima que el artículo 13, apartado A, del Código Penal del Estado de Coahuila resulta inconstitucional, por lo que debe procederse a la declaración de invalidez respectiva.³⁴

4.3. TERCERO. El legislador local, al no considerar las etapas gestacionales del producto de la concepción al momento de establecer en los artículos 195 y 196³⁶ del Código la definición del aborto y el tipo penal del aborto procurado o consentido y su penalidad, trasgrede los derechos de autonomía y libertad reproductiva, entre otros, en contra de las mujeres, violando con ello los artículos 1 y 4 constitucionales.

4.3.1. Parámetro de regularidad constitucional

4.3.1.1. Marco constitucional

³⁴ Es de mencionar que esta Representación Social controvertió ante esa SCJN, a través de la acción de inconstitucionalidad 143/2017, el artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual regulaba la figura de la prisión preventiva oficiosa de manera similar a la que ahora se impugna.

³⁵ "Artículo 195 (Aborto para efectos penales)

Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo."

³⁶ "Artículo 196 (Aborto autoprocurado o consentido)

Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella."



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.3.1.1.1. Derecho a la vida

Es claro que el derecho a la vida no se encuentre de una primera lectura en la CPEUM y que no encontramos de manera expresa en ninguna parte de ella el reconocimiento de un derecho específico a la vida, el valor de la vida, o alguna otra expresión que permita determinar que la vida tiene una específica protección normativa a través de una prohibición o mandato dirigido a las autoridades del Estado.

Sin embargo, en contra de este primer análisis puramente positivo, se argumenta, en primer término, que no es necesaria la mención expresa del derecho, ya que éste es presupuesto lógico u ontológico de la existencia de todos los demás, lo que le otorga una condición preeminente, como derecho "esencial" o "troncal" frente a éstos, ya que, sin la existencia del derecho a la vida, no tiene cabida ningún otro derecho.

EDERA: M.
DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
ACCIONES DE
CIUDAD.

De este modo, del hecho de que la vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos no se puede válidamente concluir que debe considerarse como más valiosa que cualquiera de esos otros derechos. En otros términos, podemos aceptar como verdadero que si no se está vivo no se puede ejercer ningún derecho, pero de ahí no podríamos deducir que el derecho a la vida goce de preeminencia frente a cualquier otro derecho.

4.3.1.1.2. Derecho a la libertad reproductiva y a la salud

Por su parte, tenemos que el artículo 4° constitucional reconoce diversos derechos fundamentales: la equidad de género y la protección familiar, la libertad reproductiva, el derecho y protección de la salud, entre otros.

Asimismo, debe destacarse que la reforma publicada el 31 de diciembre de 1974 a ese artículo 4° tuvo como esencia la planeación familiar en un contexto de control demográfico y la incorporación de las mujeres al trabajo, al consagrar el carácter libre de la decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos; constitucionalmente se rechaza la prohibición o limitación a tener



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

hijos, y se incluye el derecho de las personas para que no se les obligue a tenerlos.

Lo anterior se confirma con lo dispuesto en el dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados³⁷ de 12 de noviembre de 1974, en donde se manifestó:

“La igualdad jurídica del varón y la mujer; la protección legal de la organización y desarrollo de la familia y el derecho de toda persona a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espacimient de sus hijos.

El primer aspecto, referente a la igualdad jurídica, recoge oportunamente un postulado básico de los movimientos libertarios y sociales de México. Facilita la participación plena de la mujer en cuatro ámbitos esenciales de la vida nacional. El proceso educativo, el mercado laboral, la revalidación de la vida familiar y las estructuras públicas o políticas.

Esta reforma supone una ruptura de viejas barreras que impedían el cabal desempeño de las mujeres mexicanas en el proceso de desenvolvimiento.

Su alta jerarquía constitucional conlleva la remodelación de la legislación ordinaria en las esferas federal y local. Así, millones de mujeres de todo el país disfrutarán los beneficios del nuevo marco normativo.

El nuevo régimen jurídico al suprimir cualquier signo de discriminación femenina, favorece la práctica de una igualdad que facilite el despliegue integral de las capacidades de los varones y las mujeres de México.”

Por su parte, la reforma al artículo 4º constitucional publicada el 03 de febrero de 1983 estableció la obligación del Estado para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los servicios institucionales que contribuyan a la protección, a la restauración y al mejoramiento de sus niveles de salud. Lo anterior se advierte del dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Puntos

³⁷Véase en el enlace siguiente:
<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqrifxIoanMWpSihChWzc0TLcqmDMM TbDltzlR17CKokoEQ==>, consultada el 15 de noviembre de 2017 a las 20:00 horas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Constitucionales y de Salubridad de la Cámara de Senadores³⁸ de 23 de diciembre de 1982, en donde se señaló:

“Otra disposición Constitucional referida a cuestiones de salud es el artículo 4º, fundamentalmente porque tiende a preservar el desarrollo de la familia y porque señala el deber de los progenitores de preservar el derecho que tienen los menores a atender sus necesidades y, muy especialmente, su salud tanto física como mental.

A los anteriores se deben agregar los artículos 1º y 73 fracción XVI de la propia Constitución. El primero por cuanto autoriza el libre tránsito por la República, con la única limitación de atender las leyes de salubridad general de la Federación y el segundo, por establecer la potestad que tiene el Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, cuyo Consejo depende directamente del Ejecutivo Federal.

Los Gobiernos emanados de la Revolución han organizado jurídicamente y puesto en actividad instituciones que persiguen brindar atención a los habitantes de la República en sus requerimientos de salud. De esta forma, desde hace casi cuarenta años opera con atinencia y esmero el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias específicamente avocadas a salvaguardar la salud de sectores importantes de nuestra población; encontrando en dichas instituciones los trabajadores de México y sus derechohabientes, fórmulas y medios para lograr su bienestar físico e intelectual.

Ahora bien, el concepto salud en nuestros días no se constriñe ni se limita a evitar o recuperarse de los quebrantamientos físicos, sino que comprende el disfrute de posibilidades de acción que permitan el ya aludido desarrollo, entendiendo por éste no sólo el bienestar e integridad físicos, sino también el enriquecimiento intelectual y la superación en todos los órdenes, esto es, la comodidad genérica a que se refirió el Constituyente de Apatzingán.

En la preocupación estatal relativa a la protección de la salud, se incluyen leyes y programas tendientes al mejoramiento del medio ambiente, al

³⁸Véase en el link siguiente:
<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JVcxQa9nGo9/Ot6ZlE9xew==>, consultado el 15 de noviembre de 2017 a las 20:00 horas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

disfrute del tiempo libre, a la posibilidad de incrementar el rendimiento y la producción, a obtener alimentos nutritivos, así como a combatir el uso inhumano de estupefacientes, a que se practique un efectivo control de calidad de los fármacos, a la posibilidad de practicar deportes, a contar con un cuadro básico de medicamentos, a organizar, estructurar y coordinar las atribuciones y programas de las diversas Instituciones que se ocupan de la salud; a descentralizar dichos servicios, llevando a los más lejanos rincones de la República los servicios necesarios para la salud de los mexicanos, condición sine qua non de la dignidad humana."

4.3.1.2. Marco internacional

Asimismo, es pertinente tener en cuenta lo manifestado por los convenios organismos internacionales acerca del tema de los derechos reproductivos de las mujeres:

- La CADH señala que el derecho a la vida deberá de ser protegido, en general, a partir del momento de la concepción (artículo 4). Asimismo, el Estado mexicano estableció una declaración interpretativa al respecto³⁹. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpretó dicho artículo⁴⁰ y concluyó que la CADH no protege el derecho a la vida desde la concepción.
- La Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (artículo 3); establece la obligación de los Estados de abstenerse de llevar a cabo cualquier práctica violenta contra la mujer (artículo 7), y prevé que los Estados deben adoptar medidas para fomentar la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia (artículo 8). Estos preceptos se violan por el estado de Coahuila al establecer una maternidad impuesta y forzada.

³⁹ Esa declaración dice: "con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión 'en general' usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida 'a partir del momento de la concepción', ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados".

⁴⁰ En la Resolución 23/81, correspondiente al caso conocido como "Baby Boy".



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ha enfatizado la obligación de los Estados de eliminar las condiciones que impidan a las mujeres el acceso a un aborto seguro. Además, esta Convención obliga a los países signatarios a eliminar la discriminación contra la mujer. De esta forma, se debe entender que el impedir que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, a través de la penalización del aborto, es una práctica discriminatoria por razón de género⁴¹.
- El Comité de Derechos Humanos, órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha determinado⁴² que la autorización de la interrupción del embarazo es permisible y necesaria, y que, cuando un Estado la prevea, tiene la obligación de adoptar medidas que aseguren a las mujeres el acceso a servicios médicos, pues, de lo contrario, se violarían los derechos consignados en los artículos 7 y 17 del mismo instrumento⁴³.
- Asimismo, el Estado mexicano suscribió el acuerdo de la solución amistosa de la petición 161-02, ante la CIDH, en el cual se pactó instrumentar medidas para impedir la violación de los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo.
- En Sudáfrica se emitió la Ley sobre la Decisión de Interrumpir el Embarazo que autoriza el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo y establece que reivindica "los valores de la dignidad humana, el logro de la igualdad, la seguridad de la persona, el antirracismo y

⁴¹ Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

⁴² En el caso Karen Noelia Llantoy Huamán v. Perú, comunicación No. 1153/2003.

⁴³ Donde, a decir de la parte actora, se prevé que ninguna persona puede ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona tiene el derecho de no sufrir interferencias arbitrarias en su vida.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

antisexismo y el avance de los derechos humanos y las libertades que sustentan a una Sudáfrica democrática". El Tribunal Superior declaró la constitucionalidad de la legislación en 2004: "la Constitución no solamente permite que la Ley sobre la Decisión de Interrumpir el Embarazo haga del conocimiento informado la base de su regulación sobre la interrupción del embarazo, sino que, ciertamente, le exige que lo haga"⁴⁴.

- En 2007, el Tribunal Constitucional Portugués reconoció la constitucionalidad del aborto. En su resolución, el aborto no podía limitarse a la protección de la vida intrauterina, sino que tal protección debía sopesarse frente a la libertad de la mujer de escoger su proyecto de vida⁴⁵.

4.3.1.3. Marco jurisprudencial

Por otra parte, esa SCJN se ha pronunciado al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, donde la mayoría de los integrantes de ese Pleno se manifestó respecto de cuatro aspectos medulares para la resolución de esa acción, en el sentido de que:

- La CPEUM protege el derecho a la vida, pero también que dicha protección y derecho no son absolutos.
- De los informes que se requirieron, prueba pericial y comparecencias que se realizaron para resolver aquella acción: "... puede derivarse la conclusión de que no existe unanimidad en los criterios éticos, morales filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual empieza la vida humana y el momento a partir del cual debe protegerse

⁴⁴ Erdman, Joanna N., Cook, Rebecca J., Dickens, Bernard M., *El aborto en el derecho transnacional, casos y controversias*, Fondo de Cultura Económica, México 2016. p. 163.

⁴⁵ Itarte, Arrieta Noelia, *Derecho a la vida vs aborto*, Universidad de Girona, España, 2015. p.16.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

por el Estado, sustentándose a este respecto afirmaciones encontradas entre sí”.

- En el ámbito de los derechos fundamentales protegidos por los tratados y convenciones internacionales suscritos por México, el único instrumento que reconoce que el derecho a la vida de toda persona se encuentra protegido, por lo general, desde el momento de la concepción, es la CADH, pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión “por lo general” se introdujo para establecer la posibilidad de que los Estados puedan fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación interna, esa protección y las modalidades a que queda sujeta. Además, México formuló dos declaraciones interpretativas y una reserva, de las cuales, la primera declaración interpretativa versó sobre tal expresión, por lo que México “no aceptó el establecimiento de un momento específico a partir del cual debía proteger el derecho a la vida y, en esa medida, se encuentra obligado el Estado mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida como en el resto de los tratados internacionales lo disponen, esto es, sin un momento específico para el inicio de la protección y aceptando que no es un derecho absoluto”.
- Finalmente, se dijo que lo anterior no implicaba en forma alguna que la Constitución no reconozca el valor de la vida humana prenatal y su consecuente protección o tutela; sin embargo, la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que aquella constituye un bien constitucionalmente protegido, en el entendido de que no tiene una posición preeminente frente a los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona.

Por tales motivos, la SCJN concluyó declarar la constitucionalidad y conceder un plazo de doce semanas en el periodo de gestación, para efecto de la despenalización del aborto consentido.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.3.1.4. Marco doctrinal

4.3.1.4.1. Los derechos reproductivos

Joanna N. Erdman, Rebecca J. Cook y Bernard M. Dickens, consideran que debe existir un equilibrio entre la dignidad y la autonomía reproductiva de las mujeres, por un lado, y la dignidad y el respeto debidos a la vida humana prenatal, por otro, siempre y cuando el Estado cumpla con su tarea de asegurar que se adopten suficientes políticas preventivas para crear un entorno favorable que exprese apropiadamente el imperativo constitucional de no trivializar la reproducción humana⁴⁶.

Al hacer referencia a los derechos reproductivos en su conjunto, Cook⁴⁷ señala que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujeres capacita expresamente a las mujeres a acceder a los servicios de planificación familiar dentro de los cuales debe de estar incluido el aborto, al menos en el caso de que los métodos anticonceptivos

RECIBIÓ
FOLIO 1001
A DELEGACIÓN
DE ACUERDO
CONTRAVENIR
ACCIONES DE
ALTERNAS

4.3.1.4.2. El tema del aborto

Para Adrián Rentería Díaz, la elección de interrumpir o no el embarazo indeseado corresponde a la mujer, ya que ello permite poner en práctica su propia convicción moral y, asimismo, debería ser regulado jurídicamente en modo de garantizar que cada una puede tomar la solución que desee⁴⁸.

Alicia Duarte y Noroña afirma que las normas que tipifican el aborto están en desuso, ya que esta conducta prácticamente nunca es denunciada a las autoridades. Señala que en la conciencia colectiva existe una convicción de que

⁴⁶ Erdman, Joanna N., Cook, Rebecca J., Dickens, Bernard M., *El aborto en el derecho transnacional, casos y controversias*, Fondo de Cultura Económica, México 2016. p. 185.

⁴⁷ Cook, Rebecca, *Leyes y políticas sobre el aborto: retos y oportunidades*, Debate Feminista, México, año 2, vol 3, p. 98.

⁴⁸ Rentería Díaz, Adrián, *El Aborto entre la moral y el derecho*, Editorial Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 2001, pp. 105 a 107.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

la elección de abortar o no la debe de tomar la mujer, aunque esa decisión no se manifieste claramente en las normas penales. Además, cuando se denuncia el aborto, la sanción no equivale al riesgo que corren las mujeres que año con año se ven empujadas a recurrir a estas prácticas, en la clandestinidad⁴⁹.

Finalmente, Petchesky señala que lo más contradictorio del sistema de valores es que la mayoría de los abortos no se realizan porque esté en peligro la vida o la salud de la madre ni siquiera por malformaciones genéticas. Las causas señalan el punto preciso del conflicto: las mujeres hacen frente a una realidad social de profundas contradicciones, esencialmente en dos áreas: el mercado de trabajo y el rol de madre que se les impone⁵⁰.

4.3.2. Normas objeto de control de constitucionalidad

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	
Decreto número 990	
Artículo 195 (Aborto para efectos penales)	
Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo.	
Artículo 196 (Aborto autoprocurado o consentido)	
Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella.	

Como se desprende de los numerales transcritos, el Legislador local estableció i) la definición de aborto, y ii) el delito de aborto consentido y su penalidad.

4.3.3. Ejercicio de contraste

Como ya se estableció en el marco constitucional, la CPEUM protege el derecho a la vida, pero es necesario precisar que dicha protección y derecho no

⁴⁹ Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena, *El aborto. Una lectura de derecho comparado*, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993, p. 99

⁵⁰ Petchesky, Rosalin Polack, *Abortion and Woman's Choice: The State, Sexuality, and Reproductive Freedom*, 2a. Ed., Coston, Northeastern Press, 1990, pp. 386.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

son absolutos. Asimismo, se dijo que el artículo 4 de la CPEUM tiene como esencia la planeación familiar en un contexto de control demográfico y la incorporación de las mujeres al trabajo, al consagrar el carácter libre de la decisión sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Asimismo, en el plano internacional, se ha enfatizado la obligación de los Estados de eliminar las condiciones que impidan a las mujeres el acceso a un aborto seguro, es decir, los países están obligados a eliminar la discriminación contra la mujer. De esta forma, se debe entender que el impedir que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, a través de la penalización del aborto, es una práctica discriminatoria.

Del mismo modo, como se señaló en el marco jurisprudencial, la SCJN estableció el valor de la vida humana prenatal y su consecuente protección o tutela; pero la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que aquella constituye un bien constitucionalmente protegido, en el entendido de que no tiene una posición preeminente frente a los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona. Por esta razón, consideró prudente declarar la constitucionalidad del plazo de doce semanas en el periodo de gestación, para efecto de la despenalización del aborto consentido.

E inclusive, la doctrina concuerda en que las mujeres tienen derecho a acceder a los servicios de planificación familiar dentro de los cuales debe estar incluido el aborto, por lo que la elección de interrumpir o no el embarazo indeseado corresponde a la mujer.

Efectivamente, el decreto del legislador que penaliza el aborto impide que la mujer tenga realmente el poder sobre su cuerpo y el poder de decisión sobre el ejercicio de su maternidad.

Asimismo, es de destacarse que, tratándose de derechos fundamentales, la interpretación constitucional debe orientarse por el principio *pro homine*, esto es, buscar la solución que mejor responda a la vigencia de los derechos humanos, en el caso concreto, los de las mujeres como grupo en situación de



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

vulnerabilidad que ha sido históricamente objeto de discriminaciones y prejuicios, destacándose que lo que está en juego es el derecho de aquéllas a ejercer con dignidad su autonomía moral, sus libertades básicas, entre ellas, la de procreación.

No debe pasar desapercibido que la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, pero en ésta no hay norma que reconozca el derecho a la vida del producto de la concepción, y en la lista de derechos fundamentales también se encuentran el de la libertad, la dignidad, la igualdad, la integridad, la salud y la educación, entre otros, los que no están jerarquizados, por lo que no puede afirmarse que el derecho a la vida, al ser condición para ejercer otros derechos, sea superior.

Así pues, entre el derecho a la vida del producto de la concepción en la primer etapa de gestación, por un lado, y los derechos y libertades de decisión y procreación, por otro lado, deben prevalecer éstos últimos, lo que lleva a considerar legítima una medida como la despenalización del aborto voluntario dentro de las doce semanas de embarazo, circunstancia que no tomó en cuenta el legislador local al momento de dictar su norma.

Por tales motivos, el legislador local, al emitir el decreto que adiciona los artículos analizados, no consideró el incipiente desarrollo del embrión y la seguridad y facilidad de la interrupción del embarazo sin graves consecuencias para la salud de la mujer en contraposición. Si dicha interrupción se realizara clandestinamente y fuera de los parámetros, no es posible asegurar la salud de la madre.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señaló que en el siglo XXI el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna; cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros en todo el mundo y se estima que 47.000 mujeres mueren anualmente debido a



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

complicaciones derivadas del recurso a prácticas inseguras para la interrupción del embarazo⁵¹.

Por todos estos motivos, esta Representación Social considera que la penalización de la interrupción del embarazo después de esta etapa primaria resulta idónea para salvaguardar la continuación del proceso de gestación, sin embargo, el reproche por la vía penal, es decir, la imposición de la pena en el citado caso, no sirve para asegurar el correcto desenvolvimiento del proceso en gestación, pues nuestra realidad social es otra y, de lo contrario, se reafirma la discriminación hacia las mujeres. Por ende, no puede plantearse que la amenaza penal es la primera y única solución a la erradicación de las prácticas clandestinas de interrupción voluntaria del embarazo, pues, más allá de la teoría que utilizemos para justificar la imposición de la pena estatal, la sanción no puede ignorar la racionalidad y la necesidad social y económica, pues, adversamente, se habilitaría el ingreso al sistema penal de la venganza como inmediato fundamento de la sanción.

FECHA
A DEBERNAR
DE ASESORES
CONTROV. LEGAL

Por los razonamientos antes expuestos, se estima que los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza resultan inconstitucionales, por lo que debe declararse la invalidez de los mismos.

4.4. CUARTO. El artículo 224, fracción II, del Código Penal, al diferenciar entre las penas a imponer para el delito genérico de violación y el que se comete entre cónyuges, concubinos o personas con un pacto civil, violó los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los artículos 1 y 4 de la CPEUM.

4.4.1. Parámetro de regularidad constitucional

4.4.1.1. Marco constitucional

⁵¹ Visible en el link:
<http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20600&Lang=D=S>, consultado el 16 de noviembre de 2017 a las 18:47 horas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.4.1.1.1. Principio de igualdad y no discriminación

El artículo 1º, párrafos primero y quinto, de la CPEUM prevén los principios de igualdad y no discriminación⁵².

La igualdad prevista en la Constitución Federal constituye un principio complejo que no solamente otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley (en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia), sino también en la ley (en relación con su contenido).

Por su parte, el principio de no discriminación obliga a no tratar desigualmente a las personas en razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, es pertinente retomar las consideraciones de la reforma al artículo 4º de la CPEUM, referentes a la igualdad entre la mujer y el varón, las cuales fueron definidas en el apartado 4.3.1.1.2. del presente escrito, por lo que, ante la obviedad de repeticiones innecesarias, se omite transcribir su contenido.

⁵² "Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

[...]

[...]

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

4.4.1.2. Marco convencional

4.4.1.2.1. Principio de igualdad

- La CoIDH ha señalado que “[e]l derecho a la igualdad abarca dos concepciones: una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos”.⁵³

4.4.1.2.2. Principio de no discriminación

- La CADH y el PIDCP establecen en sus artículos 24⁵⁴ y 26⁵⁵, respectivamente, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación. Al respecto, la CoIDH ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación⁵⁶.

⁵³ Véase: CoIDH. *Caso Furlan y Familiares vs. Argentina*, sentencia de 31 de agosto de 2012, párrafo 267.

⁵⁴ “Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

⁵⁵ “ARTÍCULO 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

⁵⁶ Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer establece en su numeral 2, incisos b) y f)⁵⁷, 5, inciso a)⁵⁸, y 16, punto 1, incisos d) y f)⁵⁹, que los Estados partes

55, y *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 216.

⁵⁷ "Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen

a). [...]

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) a e). [...]

d) Adaptar (sic) todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;"

⁵⁸ "Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;"

⁵⁹ "Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) a c). [...]

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e). [...]

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

[...]"



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

condenan la discriminación en contra de la mujer y tomarán medidas apropiadas para modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad.

- En relación con este principio, la CoIDH se ha pronunciado en el sentido de que las mujeres no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación.⁶⁰
- La Convención Belém do Pará prevé en sus artículos 6, punto b⁶¹, 7, punto e⁶², y 8, punto b⁶³, el derecho de todas las mujeres a una vida libre

⁶⁰ Véase: CoIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160

⁶¹ Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. [...]

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación."

⁶² Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. a d. [...]

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; [...]"

⁶³ "Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. [...]

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

de violencia y, para ello, los Estados Parte adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar dicho fenómeno.

- Al respecto, la CoIDH ha reconocido que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche a la mañana. El cambio de patrones culturales es una tarea difícil para cualquier gobierno. Más aún cuando los problemas emergentes de la sociedad moderna: alcoholismo, drogadicción, tráfico de drogas, pandillerismo, turismo sexual, etc., contribuyen a agudizar la discriminación que sufren varios sectores de las sociedades, en particular aquellos que ya se encontraban en una situación de desventaja, como es el caso de las mujeres, los y las niñas, los y las indígenas⁶⁴

- La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ha señalado que en las legislaciones de los Estados se debe establecer de manera explícita la posibilidad de acusar formalmente a un esposo, a una esposa o a una pareja de haber agredido sexualmente a su cónyuge o a su pareja, con independencia de que vivieran juntos o no en el momento de producirse la agresión; añado a que en la legislación se debe dejar claro que la existencia de una relación de pareja entre las partes no es una atenuante⁶⁵.

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
[...]"

⁶⁴ Véase: CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

⁶⁵ Véase: Artículo 278 del Código Penal de Canadá (R.S.C. 1985, c. C-46) modificado por 1980-81-82-83, c. 125, s. 19 (en inglés); Manual de la ONU, 3.4.3.1; y Agresión sexual en una relación conyugal o de pareja (en inglés) StopVAW, The Advocates for Human Rights



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Además, dicha Entidad ha dicho que los Estados no deben establecer penas menos severas para el cónyuge agresor ni obstáculos procedimentales especiales para el cónyuge superviviente⁶⁶.

- De igual modo, el Grupo de Expertos sobre buenas prácticas en la legislación sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha señalado⁶⁷ que aún existen diversas prácticas en los Estados, donde contemplan una penalidad menor en el delito de violación en el matrimonio o incluso no tipifican dicho ilícito, circunstancia que, consideran, debe erradicarse.

4.4.1.2. Marco jurisprudencial

4.4.1.2.1. Principio de igualdad y no discriminación

En relación con los referidos principios, esa SCJN ha manifestado lo siguiente:

- Cuando la SCJN conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.⁶⁸

⁶⁶ Goldfarb, Sally F. , *La respuesta jurídica a la violencia contra la mujer en Estados Unidos: Reformas recientes y problemas por resolver*, visible en el siguiente enlace: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/expertpapers/EGMGPLVAW%20Paper%20%28Sally%20Goldfarb%29.pdf, consultado el 16 de noviembre de 2017 a las 13:53 horas.

⁶⁷ Visible en el enlace: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/expertpapers/EGMGPLVAW%20Paper%20%28Sally%20Goldfarb%29.pdf, consultado el 16 de noviembre de 2017 a las 13:54 horas.

⁶⁸ Registro No. 174 247 IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Localización: [J] ; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 2006; Pág. 75. 1a./I. 55/2006 .



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

- El principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado.⁶⁹
- Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante.⁷⁰
- De los artículos 1º, párrafo tercero, y 4º, párrafo primero, de la CPEUM, se advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias.⁷¹
- Existe discriminación normativa cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de forma desigual sin que exista una

⁶⁹ Registro No. 180 345, IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. Localización: [J] ; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Octubre de 2004; Pág. 99. 1a./J. 81/2004.

⁷⁰ Registro No. 2 005 528. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014; Tomo I; Pág. 644. 1a. XLIII/2014 (10a.).

⁷¹ Registro No. 171 756 GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Localización: [TA] ; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 639. 2a. CXVI/2007.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

justificación razonable para otorgar ese trato diferenciado. Al respecto, debe señalarse que la discriminación normativa constituye un concepto relacional, en el sentido de que, a la luz del derecho a la igualdad, en principio, ningún régimen es discriminatorio en sí mismo, sino en comparación con otro régimen jurídico. En este sentido, la justificación de las distinciones legislativas que distribuyen cargas y beneficios se determina a partir de un análisis de la razonabilidad de la medida.⁷²

- La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta.⁷³
- Las distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1º constitucional, también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad.⁷⁴

⁷² Registro No. 2 010 493 **DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA.** Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, Noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 974. 1a. CCCLXVIII/2015 (10a.).

⁷³ Registro No. 2 003 250 **CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ERICTO.** Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013; Tomo 1; Pág. 958. 1a. CI/2013 (10a.).

⁷⁴ Registro No. 2 007 924. **IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL**



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Además de los criterios ya citados, esa SCJN aprobó la modificación de la jurisprudencia 10/94⁷⁵, la cual constituye un paso firme para erradicar las posturas inequitativas y discriminatorias contra la mujer, así como el derecho a decidir en relación con su cuerpo. En ella, la SCJN determinó que el delito de violación lleva implícita la ausencia del consentimiento de la víctima, quien es forzada a la relación sexual mediante la anulación de su resistencia por medio de la violencia física o moral. Lo anterior, no obstante que exista un vínculo matrimonial entre activo y pasivo, debido a que esta circunstancia no conlleva ninguna excepción que impida la integración del delito de violación.

4.4.1.4. Marco doctrinal

Según Rebecca Cook y Simone Cusak, un estereotipo es: "[U]na visión generalizada o preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir (v.g., mujeres, lesbianas, adolescentes). Según esta definición, los estereotipos presumen que todas las personas miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características particulares (v.g., los adolescentes son irresponsables), o tienen roles específicos (v.g., las mujeres son cuidadoras por naturaleza). Para calificar una generalización como un estereotipo, no importa si dichos atributos o características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o si sus miembros de hecho, poseen o no tales roles. El elemento clave es que, en tanto se presume que el grupo específico posee tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por

EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014; Tomo I; Pág. 720. 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.).

⁷⁵ En este asunto, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la imposición de la cópula "normal" al consorte, utilizando como medio comisivo la violencia, no integra el delito de violación, sino uno diverso.

el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcepción que existe del mismo⁷⁶.

Sobre el particular, la SCJN ha señalado que el término género hace referencia a las expectativas de índole cultural en relación con los roles y comportamiento de los hombres y de las mujeres, que encuentra su validación en la construcción social; es decir, se distinguen los aspectos atribuidos, tanto a hombres, como a mujeres desde un punto de vista social, de los determinados biológicamente. Por esta razón, los roles de género y los comportamientos entre ambos (relaciones de género) pueden variar con el tiempo, incluso si ciertos aspectos de dichos roles derivan de las diferencias biológicas entre ambos sexos⁷⁷.

4.4.1.5. Norma objeto de control de constitucionalidad

La fracción segunda del artículo 224 que se tilda de inconstitucional señala:

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	
PROCESOS DE	Decreto número 990
Artículo 224 (Violación, violación al cónyuge o pareja, violación equiparada) Además de los previstos en el artículo siguiente, los delitos de violación, violación al cónyuge o pareja y de violación equiparada, consistirán en los siguientes: I. [...] II. (Violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares) Se aplicará prisión de tres a diez años y multa, a quien por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con la persona con quien esté unida en matrimonio, concubinato o pacto civil sin la voluntad de ésta. En los supuestos de esta fracción, el delito se perseguirá por querrela.	

⁷⁶ Cook, Rebecca, y Cusack, Simone, [trad. Andrea Parra], *Estereotipos legales. Perspectivas legales transnacionales*, Profamilia, 2010, p. 11.

⁷⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación. *6 voces sobre justicia y género en el Poder Judicial de la Federación*, México, marzo de 2011, p. 64.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Como se desprende del numeral antes transcrito, se modificó la penalidad en relación con el delito de violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares.

4.4.1.6. Ejercicio de contraste

El suscrito considera que el artículo 224, fracción II, del Código Penal, que sanciona de manera diversa el delito de violación entre cónyuges, respecto del tipo genérico, viola los principios de igualdad y no discriminación, como se intentará comprobar a continuación.

En primer lugar, resulta necesario contrastar las penas que se prevén para los delitos de violación y violación entre cónyuges, mediante el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	
Decreto número 990	
Violación	Violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares
Artículo 224. ... I. (Violación) Se considera violación y se impondrá de siete a catorce años de prisión y multa, a quien por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo sin su voluntad.	Artículo 224. ... I. ... II. (Violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares) Se aplicará prisión de tres a diez años y multa, a quien por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con la persona con quien esté unida en matrimonio, concubinato o pacto civil sin la voluntad de ésta. En los supuestos de esta fracción, el delito se perseguirá por querrela.

Del cuadro anterior se puede apreciar que el legislador de la entidad federativa establece sanciones diversas para conductas que dañan de idéntica forma al mismo bien jurídico tutelado, la libertad sexual. Adicionalmente, para el caso de violación entre cónyuges, señala que se perseguirá por querrela.

En el presente caso, se estima que el artículo impugnado realiza una diferenciación injustificada contraria al principio de igualdad conforme a lo que a continuación se explica:

Como se manifestó en el apartado 4.4.1.1.1. del presente escrito, el principio de igualdad se configura en la CPEUM como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo que significa que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

Así pues, si bien tenemos que el artículo 224, fracción II, del Código Penal tipifica el delito de violación entre cónyuges, la diferencia en la penalidad resulta contraria a los postulados constitucionales e internacionales expuestos en apartados anteriores, puesto que produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva, ya que a iguales supuestos de hecho corresponderían similares situaciones jurídicas.

Ahora bien, ante un caso en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, se debe identificar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, en contravención al imperativo constitucional.

Lo anterior, pues el último párrafo del artículo 1 de la CPEUM denota la intención del Poder Revisor de la Constitución de cuidar que las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas sean especialmente cuidadosas a la hora de establecer una



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

distinción legislativa basada en una serie de categorías, obligación que descansa sin duda sobre la base de un juicio histórico y sociológico que muestra que las personas han sido frecuentemente objeto de un trato injusto o incluso denigrante por motivos relacionados con esos factores: origen étnico, origen nacional, género, edad, etc.

Esa SCJN ha sostenido que, cuando la distinción impugnada se apoya en una "categoría sospechosa", debe realizarse un escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad.

Por ello, se propone un examen de proporcionalidad respecto de la medida legislativa de estudio, en el que se debe corroborar: i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental, y iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada⁷⁸.

a) Identificación de una finalidad constitucionalmente válida⁷⁹: la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Al realizar este escrutinio, debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente.

⁷⁸ Registro No. 2 013 156. TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 36, Noviembre de 2016; Tomo II; Pág. 915. 1a. CCLXIII/2016 (10a.).

⁷⁹ Registro No. 2 013 143. PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 36, Noviembre de 2016; Tomo II; Pág. 902. 1a. CCLXV/2016 (10a.).



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Por lo que hace a este requisito —identificación de una finalidad constitucionalmente válida—, esta Representación Social considera que la norma en análisis no persigue ninguna finalidad constitucionalmente válida, pues no existe motivo racional para que la penalidad establecida en el delito de violación entre cónyuges deba ser menor al delito de violación simple, máxime que la afectación al bien jurídico tutelado es de igual proporción.

Al no superar la grada antes mencionada, se hace innecesario el estudio de las demás etapas del test de proporcionalidad, concluyéndose así que la norma que se combate viola el principio de igualdad y no discriminación contemplado en los párrafos primero y quinto del artículo 1º de la Constitución Federal.

Finalmente, se advierte que, históricamente, en el delito de violación entre cónyuges la víctima normalmente es mujer, por lo que el legislador tendría que tipificar el delito desde una perspectiva de género. Sin embargo, por el contrario, se estima que la norma impugnada hace una diferenciación basada en una categoría sospechosa, ello, debido a los estereotipos históricos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y en la pareja, los cuales han tenido como repercusión que este grupo se encuentre en permanente situación de vulnerabilidad.

De hecho, incluso a nivel jurídico, estas concepciones discriminatorias estuvieron vigentes en algún momento: en la contradicción de tesis 5/92 resuelta por la Primera Sala de esa SCJN, se determinó que:

“Para estar en aptitud de resolver sobre el particular, en primer término debe atenderse a los fines que tiene la institución del matrimonio, entre los cuales se cuenta el de la procreación de la especie; por lo que es lógico deducir que los cónyuges deban prestarse a la relación sexual siempre y cuando ésta se lleve a cabo de manera normal, entendiendo por ello que la cópula se limite a la introducción total o parcial del pene en el órgano sexual femenino; pues solamente tienen derecho a una relación sexual de esta naturaleza.

Ahora bien si el cónyuge impone la cópula normal de manera violenta, estima esta Sala que no se integra el delito de violación, a pesar del empleo de los medios típicos, porque ejercita indebidamente su derecho, adecuándose su conducta a lo previsto en el artículo 226 del Código Penal del Distrito Federal...”



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Desafortunadamente, estos estereotipos continúan vigentes y conllevan a la elaboración de normas como la que se está analizando, al establecer en el ilícito una penalidad menor con relación a los demás delitos de violación.

Lo anterior conculca los marcos constitucional y convencional advertidos en el presente concepto de invalidez, que reconoce los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y libre de discriminación, y obligan, entre otras cuestiones, a que las autoridades legislativas adopten todas las medidas que sean necesarias para:

- Modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación en contra de la mujer, así como los que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer;
- Asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre;
- Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de eliminar los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y
- Velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
- No deben establecer penas menos severas para el cónyuge agresor ni obstáculos procedimentales especiales para el cónyuge superviviente.

Por lo anteriormente expuesto, esta Representación Social, estima que esa SCJN debe declarar inconstitucional el artículo 224, fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En razón de todo lo anterior, y atendiendo al parámetro de regularidad constitucional de cada concepto de invalidez, el suscrito promueve esta acción de inconstitucionalidad a efecto de solicitar respetuosamente a esa SCJN, declare la invalidez de las normas objeto del presente medio de control constitucional.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

POR LO EXPUESTO, ATENTAMENTE SOLICITO:

PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad que ostento, promoviendo acción de inconstitucionalidad; por acreditados a los delegados que se mencionan en este oficio, y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones.

SEGUNDO. Solicito a usted que, de no existir inconveniente alguno, autorice a los citados servidores públicos para la utilización de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas o scanners para la reproducción de las constancias que obren en autos.

TERCERO. Acordar de conformidad lo solicitado.

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017.

ATENTAMENTE

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales

Lic. Alberto Elías Beltrán

AAPP/DMVM/LVS/GAFC/MNM

055985

SUPLENTE DE
JEFATURA DE LA NACION

2017 NOV 27 PM 1 10

UNIDAD DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibi de un enviado en (51) Folios
cos:

Copia certificada de un nombramiento en
(2) Folios incluida su certificación, el cual se
recibe en condición de maltrato

VICTOR JUAN RUIZ BARCENAS



UNIDAD JUDICIAL DE LA F
UNIDAD DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
TRÁMITE DE DE
JUDICIALES Y DE
INSTITUCIONAL

SUPLENTE DE
JEFATURA DE LA NACION
SUBSECRETARÍA DE

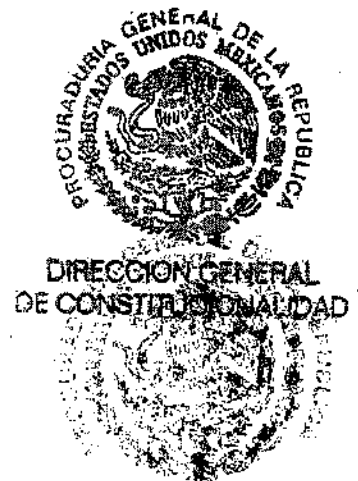
2017 NOV 27 PM 2 02

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIAS CONS
DE ACCIONES DE RECOMB



C. Alberto Elías Beltrán,
Presente.

Enrique Peña Nieto, *Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, he tenido a bien nombrarlo Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.*



Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.

DIRECCION GENERAL
DE CONSTITUCIONALIDAD

artículo 43, fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal



DIRECCIÓN
CONSTITUCIONAL

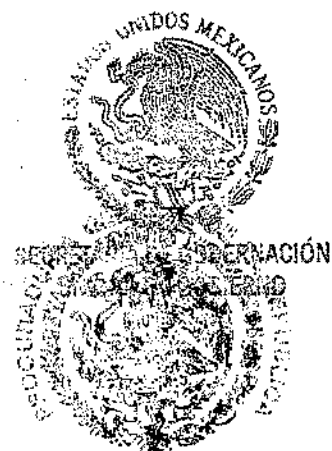


DIRECCIÓN
CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 11 fracciones V y VI del Reglamento Interior de esta Secretaría de Gobernación, queda registrado con el número 574 a foja 18, del "Libro de Nombramientos de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal".

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2016.

EN AUXILIO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN I
Y 11 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, FIRMA LA
DIRECTORA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CON LOS
PODERES DE LA UNIÓN, LA LIC. MARTHA T. URRUTIA
CÁRDENAS.



DIRECCIÓN GENERAL
CONSTITUCIONAL

- - - El que suscribe, en mi carácter de Director General de Constitucionalidad adscrito a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 12, fracción XIV, de su Reglamento: -----

----- CERTIFICO -----

- - - Que la presente copia certificada útil en dos hojas, la primera por ambos lados y la segunda por el anverso, es reproducción fiel y exacta del testimonio que obra en los archivos de la Dirección General de Constitucionalidad, mismo que se tuvo a la vista y respecto del cual se hizo su compulsa. Lo anterior, con el fin de que la misma acompañe a la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la falta de titular de la Institución, con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR); 3, inciso A), fracción I, y 137, párrafo primero, de su Reglamento; así como 6°, fracción II, de la citada LOPGR en contra de diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. -----

- - - Se expide la presente en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. -----

----- CONSTE. -----

ANOS
FEDERACIÓN
DE LERACION
DE ACHEROS
ONT-ROW
EACON
IA

Lic. Armando Argüelles Paz y Puente



DIRECCION GENERAL
DE CONSTITUCIONALIDAD